

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500820160139901
Proceso:	Ordinario
Demandante:	BEATRIZ ADIELA TORRES SANCHEZ
Demandado:	JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, PROTECCIÓN S.A., JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	17/03/2023
Decisión:	CONFIRMA Y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	BEATRIZ ADIELA TORRES SÁNCHEZ
DEMANDADA	PROTECCIÓN S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
ORIGEN	Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 31 05 008 2016 01399 01
TEMAS	Nulidad de dictamen pericial, pensión de invalidez
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO SALAS FERNANDO RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por BEATRIZ ADIELA TORRES SÁNCHEZ contra PROTECCIÓN S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>1</sup>

La señora Beatriz Adielá Torres Sánchez formula demanda contra Protección S.A. y las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, pretendiendo **i)** se declare y/o ratifique el dictamen de pérdida de capacidad laboral del 31 de agosto de 2016 emitido por el Cetro Multidisciplinario en Valoración del Daño Corporal y Salud Ocupacional - CEMVAS-, que determinó una PCL del 53.67% y fecha de estructuración del 11 de mayo de 2016, y como consecuencia de lo anterior **ii)** se dejen sin efectos los dictámenes emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; **iii)** se condene a Protección S.A. a reconocer y pagar de forma retroactiva y a partir de la fecha de estructuración la pensión de invalidez, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, **iv)** Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y/o indexación; y **v)** Costas del proceso.

<sup>1</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs.2/5

Fundamentó sus pretensiones en que padece de fibromialgia artrítica, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, antecedentes personales de depresión, entre otras dolencias que han sido objeto de múltiples tratamientos clínicos ordenados por distintos especialistas. Ha cotizado al Sistema General de Pensiones a través de Protección S.A. desde el año 2001, estando anteriormente afiliada a Colpensiones, acumulando un total de 948.71 semanas en toda su vida laboral, presentando incapacidades desde el año 2013.

Debido a los problemas de salud que la aquejan, incrementados aceleradamente, fue calificada en su PCL por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante dictámenes del 29 de abril de 2015 y 8 de octubre de 2015 otorgando un 49.26% con F.E del 11 de marzo de 2015. Acudió ante el Centro Multidisciplinario en Valoración del Daño Corporal y Salud Ocupacional - CEMVAS-, quien calificó su PCL el 31 de agosto de 2016 en un 53.67% estructurada el 11 de mayo de 2016.

Refiere que a la presentación de la demanda cuenta con 48 años de edad, es operaria de máquina fileteadora, máquina plana y oficios varios, su actividad laboral demanda estar en constante movimiento, en postura bípeda y caminando, repartiendo trabajo a otras operarias de la empresa donde labora, estando imposibilitada para hacerlo dado que sus enfermedades son crónicas, permanentes, de curso y pronóstico incierto, y necesita de apoyo permanente para desplazarse debido a sus constantes e intensos dolores.

**Oposición a las pretensiones de la demanda:** quien conforma la pasiva se opuso oportunamente a las pretensiones de demanda, así:

**i) Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia<sup>2</sup> -JRCI-:** El dictamen emitido por la entidad se ciñó estrictamente a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez, con sustento fáctico en los antecedentes médicos y clínicos aportados por la parte demandante. Las pretensiones carecen de sustento legal, porque el concepto emitido que pretende se valide, fue emitido por persona jurídica diferente a las juntas de calificación que están autorizadas por ley. Excepcionó: inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

**ii) Protección S.A.<sup>3</sup>:** la demandante fue valorada por SURA el 27 de enero de 2015, otorgándole una PCL de 36.66% de origen común y FE del 27 de enero de 2015, entidad autorizada legalmente para emitir el dictamen, decisión contra la cual formuló recursos de ley, siendo confirmado por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, quienes establecieron una PCL de 49.26% con FE de 26 de marzo de 2015, quedando en firme la valoración de la demandante, por lo cual, no le asiste derecho a la prestación deprecada por faltar el primer requisito exigido legalmente para ello. Excepcionó: prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe de la entidad, improcedencia de intereses moratorios e indexación, afectación sostenibilidad financiera y la que llamó “innominada o genérica”

---

<sup>2</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 164/166

<sup>3</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 182/194

**ii) Junta Nacional de Calificación de Invalidez<sup>4</sup> -JNCI-** la entidad, como organismo competente para calificar la PCL de la demandante, emitió dictamen de acuerdo al Decreto 917 de 1999, asignándole un porcentaje que se encuentra cabalmente ajustado a la realidad clínica y personal de la paciente al momento de su calificación, de manera que cualquier evaluación en la que se incluyan los resultados de valoraciones posteriores a la fecha de calificación de la Junta Nacional o que incluya condiciones clínicas no documentadas en su momento, exoneraría la entidad de cualquier cargo, porque se estaría evaluando una condición clínica posterior a la que se tuvo en cuenta para emitir el concepto. Excepcionó: legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de responsabilidad a la entidad; improcedencia de la favorabilidad respecto a la calificación médica ocupacional: inexistencia de conflicto normativo; inexistencia de obligación: improcedencia de las pretensiones respecto a la Junta Nacional de Calificación -competencia del juez laboral-, buena fe, y la que llamó “excepción genérica”.

### **Sentencia de primera instancia<sup>5</sup>**

El 2 de abril de 2019, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando la nulidad de dictámenes realizados a la demandante por la JRCI y JNCI el 29 de abril de 2015 y 8 de octubre del mismo año respectivamente, para así darle plena validez al dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el 4 de septiembre de 2018. Condenó a Protección S.A. a reconocer y pagar a la actora pensión de invalidez a partir del 22 de junio del 2018, y a pagar la suma de \$9'015.531 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 22 de junio de 2018 y el mes de abril de 2019, disponiendo continuar pagando para ese año una mesada pensional de \$828.116, autorizó los descuentos en salud y dispuso la indexación de la condena. Absolvió a la JRCI y JNCI de las pretensiones incoadas en su contra. Condenó en costas a Protección S.A. en favor de la demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$828.116

Para fundamentar lo decidido, indicó respecto del dictamen aportado por la demandante efectuado por CEMVAS que le otorgó una PCL del 53.67% que no sería valorado como prueba pericial por no haber sido tramitado como tal, no habiéndose sometido al principio de contradicción regular y practicado dentro del proceso, limitándose a tenerlo como prueba documental, pese a ello, tuvo como válido el dictamen realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, decretado como prueba de oficio por la A Quo, quien dictaminó una nueva PCL de la demandante en 52.57% con fecha de estructuración del 22 de junio de 2018, resaltando que éste cumple a cabalidad con lo descrito en el Decreto 917 de 1999, procediendo a declarar la nulidad de los dictámenes realizados por las Juntas de Calificación de Invalidez, Regional y Nacional. Encontró acreditados los requisitos de 50 semanas dentro de los 3 años a la FE, por acreditar entre el 22 de junio de 2015 y el 22 de junio de 2018 un total de 121.28 semanas. Dispuso su disfrute a partir de la FE, en cuantía del salario mínimo legal con base a 13 mesadas anuales.

---

<sup>4</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 263/281

<sup>5</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, pág 397/399; 05Sentencia0320190184.mp3

Negó el reconocimiento de los intereses moratorios en virtud que el reconocimiento de la prestación se efectuó en el marco del proceso ordinario laboral, en razón del nuevo dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la U de A, disponiendo en su lugar la indexación de las mesadas reconocidas, hasta el momento efectivo de su pago.

### **Recursos de apelación:**

**i) Demandante:** Inconforme parcialmente con lo decidido, solicita se revoque la sentencia en cuanto absolvió del reconocimiento y pago de los intereses moratorios, toda vez que la H. CSJ ha dispuesto que dicho concepto procede siempre que haya un retardo en el pago de las mesadas pensionales, independiente de la buena o mala fe en el comportamiento de las administradoras, debiendo concederse en el presente caso, desde el 22 de junio de 2018 fecha en la que se estructuró la PCL de la demandante.

**ii) Protección S.A.:** Solicitó se revoque lo decidido, exponiendo los siguientes argumentos:

- El dictamen de la JNCI fue realizado el 8 de octubre de 2015, y la prueba pericial que sirve de sustento a la orden judicial se emitió el 4 de septiembre de 2018, por lo que no había transcurrido los 3 años de revisión previstos en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993;
- Deben revisarse los criterios utilizados por la JNCI como última instancia para proferir el dictamen, respecto de la prueba pericial, pues de los porcentajes establecidos en cada uno de ellos, se observa que en el de la JNCI el valor de la discapacidad era mayor que el establecido por el perito de la FNSP; igual ocurre con la minusvalía que mantiene el porcentaje en 17,5%, encontrando solo diferencia en la deficiencia, siendo un poco mayor la de la prueba pericial, no obstante, resalta que las pretensiones de la demanda están enfocadas a revisar el criterio de discapacidad de la demandante, y por ello, la prueba pericial no superó el porcentaje establecido por la JRCI que fue de 7.6%, al fijarse en un 6.9% la del perito, por ello, el fallo emitido no corresponde con la pretensión de la demandante en cuanto a aumentar el valor de la pérdida de capacidad laboral;
- Solicita ser absuelta de la indexación, en virtud de que el fondo de pensión son patrimonios autónomos que tienen su propia actualización con los movimientos del mercado, y los resultados de esas inversiones financieras, por lo tanto, no corresponde a la administradora, actualizar una suma, que ya por el mismo movimiento se encuentra actualizada. que como bien sabemos los fondos de pensiones son patrimonios autónomos que tienen su propia actualización con los movimientos del mercado y los resultados de esas inversiones financieras y por lo tanto no corresponde a la administradora actualizar una suma que ya por el mismo movimiento se encuentra actualizada.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, tanto la parte demandante como Protección S.A., lo recorrieron de forma oportuna, así:

**i)Demandante:**<sup>6</sup> Se ratificó en los argumentos expuestos al momento de formular el recurso de alzada.

**ii) Protección S.A.**<sup>7</sup> Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación para deprecar la revocatoria de la sentencia, agregando que del dictamen realizado por la FNSP de la U de A, se puede determinar que las enfermedades que aquejan a la demandante son degenerativas, lo cual hace que el grado de las enfermedades pueda oscilar entre una fecha y la otra, además, señaló la perito que estas enfermedades tienden a cambiar, por lo cual no es posible establecer a ciencia cierta si la paciente va a presentar desmejora en sus diagnósticos, de ahí que lo aludido por la perito no es un elemento suficiente para establecer la invalidez de la demandante.

Finalmente, solicita en caso de confirmarse la condena, se mantenga la absolución respecto del pago de intereses moratorios.

## **II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

La competencia de la Sala está dada por los arts.66 y 66 A del CPTSS, es decir por los puntos objeto de apelación.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la validez del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral de la demandante, emitido por AFP Protección S.A. la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, así como la fecha de estructuración de la PCL de la demandante. Igualmente, se definirá **b)** la procedencia del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, así como las condiciones de causación y disfrute de la prestación; y **c)** la procedencia del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional.

### **Hechos relevantes probados documentalente:**

- Beatriz Adielia Torres Sánchez nació el 8 de noviembre de 1968<sup>8</sup>.
- Formulario de vinculación a pensiones de la demandante a Protección S.A. del 12 de octubre de 2001, el cual se hizo efectivo el 1° de diciembre de 2001<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> 02SegundaInstancia; 03AlegatosDemandante0820161399.pdf

<sup>7</sup> 02SegundaInstancia; 04AlegatosProteccion0820161399.pdf

<sup>8</sup>01PrimeraInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, pág. 11 No se aportó registro civil de nacimiento, pero si copia de la cédula de ciudadanía que indica tal fecha, la cual no fue discutida por la pasiva.

<sup>9</sup> 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 195

- La Aseguradora Suramericana por solicitud elevada el 26 de febrero de 2014, emitió dictamen N°43534306 del 27 de enero de 2015 en que calificó la PCL de la señora Beatriz Adiola Torres Sánchez en 36.66%, de enfermedad común y con F.E. del 27 de enero de 2015<sup>10</sup>, el cual fue notificado personalmente a la afiliada el 13 de febrero del mismo año<sup>11</sup>.
- La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia –JRCI-, emitió Dictamen N° 53859 del 29 de abril de 2015, -se desconoce la fecha de su notificación-, calificando la PCL de Beatriz Adiola Torres Sánchez en un 49.26%, de origen común con F.E. del 11 de marzo de 2015<sup>12</sup>.
- La Junta Nacional de Calificación de Invalidez –JNCI-, emitió Dictamen N°53859 del 8 de octubre de 2015, -se desconoce la fecha de su notificación-, ratificando la PCL de la señora Torres Sánchez en un 49.26%, de origen común y con F.E. del 11 de marzo de 2015<sup>13</sup>.
- Dictamen de PCL emitido por CEMVAS -Centro Multidisciplinario en Valoración del Daño Corporal y Salud Ocupacional, del 31 de agosto de 2016, otorgando una PCL a la señora Torres Sánchez en 53.67% por enfermedad común y con F.E. del 11 de mayo de 2016<sup>14</sup>.
- Aparte de Historia Clínica de la señora Torres Sánchez<sup>15</sup>.
- Historial de incapacidades de la demandante<sup>16</sup>.
- No se allegó copia de la reclamación de la demandante solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero mediante comunicado del 7 de enero de 2016, Protección S.A., dio respuesta a su solicitud, indicando que el reconocimiento de la prestación estaría en suspenso hasta tanto se cuente con dictamen en firme emitido por la JNCI<sup>17</sup>.
- El 4 de septiembre de 2018, la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia emitió dictamen, por orden judicial, en que calificó la PCL de la señora Torres Sánchez en 52.57% de origen común y con F.E. a partir 22 de junio de 2018<sup>18</sup>.
- Según historia laboral expedida por Protección A.A., Beatriz Adiola Torres Sánchez cotizó 1.403 semanas entre el 15 de junio de 1989 y el 30 de octubre de 2017<sup>19</sup>.

**a) La validez del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral de la demandante.**

---

<sup>10</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 196/209

<sup>11</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 210/211

<sup>12</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 12/19 y 213/216

<sup>13</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 20/27 y 217/228

<sup>14</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 28/34

<sup>15</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 35/125 y 335/371

<sup>16</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 126/129

<sup>17</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 15/20

<sup>18</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 324/330

<sup>19</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 246/255

La activa pretendió se deje sin efectos los dictámenes emitidos respecto de su PCL por parte de Protección S.A., JRCIA y JNCI, mientras que éstas se oponen a tal pretensión, por haberse proferido conforme a la disposición normativa existente para ello.

En el escrito de demanda la activa no expone las razones por las cuales se deprecia la nulidad de los dictámenes emitidos por las demandadas. No se presentan censuras puntuales en relación con las calificaciones objetadas, limitándose a expresar que la inconformidad radica en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral reconocido, advirtiendo que la enfermedad de la demandante es crónica, degenerativa, con deterioro progresivo y permanente en el tiempo, correspondiendo a la Sala acudir a criterios normativos y jurisprudenciales para definir sobre la validez de los dictámenes emitidos con antelación a radicación de la demanda.

Conforme a lo expuesto, la Sala atenderá al precedente judicial en la materia, según el cual, los dictámenes periciales emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez si bien constituyen prueba idónea de la pérdida de capacidad laboral, pero no son una prueba solemne de la misma, pudiendo ser debatidos en el escenario judicial, en el cual, el principio de libre formación del convencimiento permite al Juez, acudir a otros medios de convicción para decidir de fondo sobre la pérdida de capacidad de la demandante, en cada caso concreto<sup>20</sup>. De manera que, también puede prescindirse de ellos, optándose por el dictamen que aporte mayores o mejores elementos de convicción en torno a la calificación de la pérdida de capacidad laboral, tanto en atención a la naturaleza de la pérdida, como a su calificación porcentual y fecha de estructuración.

La normatividad vigente al momento de calificar la pérdida de capacidad laboral de la señora Torres Sánchez está contenida en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005<sup>21</sup>, modificadora del artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 917 de 1999 Manual Único para la Calificación de Invalidez, que regía para al momento de la solicitud de calificación -2 de febrero de 2014<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Ver entre muchas otras, las SL 29622 de 2006, SL 27528 de 2007, SL 35450 de 2012, SL 44653 de 2013, SL16374 de 2015 y SL5280-2018, de las cuales hace mención la SL 1044 de 2019, que retoma el tema y sostiene la postura de vieja data.

<sup>21</sup> El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional.

Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, ARP o aseguradora) sea inferior en no menos del diez por ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta de la entidad. Estas juntas son organismos de carácter interdisciplinario cuya conformación podrá ser regionalizada y el manejo de sus recursos reglamentado por el Gobierno Nacional de manera equitativa.

<sup>22</sup> 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 196/209



Son cinco los dictámenes allegados al expediente, a través de los cuales se determinó tanto, la naturaleza de las patologías padecidas por la demandante, que ocasionaron la pérdida de su capacidad laboral, o su porcentaje y/o fecha de estructuración. Entre ellos debe decidirse a cuál atender, para establecer la validez de los dictámenes emitidos con antelación a radicación de la demanda, así:

**- Dictamen N°43534306 emitido por Suramericana S.A. el 27 de enero de 2015<sup>23</sup>**

Tuvo en cuenta como patologías a calificar: *Hipertensión esencial (primaria); diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación; episodio depresivo, no especificado y trastorno de dolor persistente somatomorfo-*. Determinó que la pérdida de capacidad laboral que presenta la hoy demandante es de origen común, asciende al 36.66%, con F.E. del 1° de enero de 2015.

- Deficiencias: 18.26%
- Discapacidades: 5.4%
- Minusvalías: 13%

**- Dictamen N°53859 emitido por la JRCIA del 29 de abril de 2015<sup>24</sup>.**

Tuvo en cuenta como patologías a calificar: *episodio depresivo moderado, dolor crónico intratable, poliartrosis -no especificada- e Hipertensión esencial (primaria); sin mención de complicación*. Determinó que la pérdida de capacidad laboral que presenta la hoy demandante es de origen común, asciende al 49.26%, con F.E. del 11 de marzo de 2015.

- Deficiencias: 24.16%
- Discapacidades: 7.60%
- Minusvalías: 17.50%

**- Dictamen N°53859 emitido por la JNCI el 8 de octubre de 2015<sup>25</sup>.**

Tuvo en cuenta las mismas patologías valoradas por la JRCIA, confirmando el porcentaje de PCL, origen y F.E.

**- Dictamen de PCL emitido por CEMVAS -Centro Multidisciplinario en Valoración del Daño Corporal y Salud Ocupacional, del 31 de agosto de 2016<sup>26</sup>.**

Valoró los siguientes diagnósticos: *fibromialgia (homologación OA clase II), Hipertensión arterial controlada clase I, Diabetes Mellitus controlada, Clase I, depresión moderada clase II*; con lo que concluyó en una PCL del 53.67% por enfermedad común y con F.E. del 11 de mayo de 2016.

- Deficiencias: 27.17%
- Discapacidades: 7.5%
- Minusvalías: 18%

---

<sup>23</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 196/209

<sup>24</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 12/19 y 213/216

<sup>25</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 20/27 y 217/228

<sup>26</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 28/34

**- Dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia emitido el 4 de septiembre de 2018<sup>27</sup>.**

Este dictamen fue ordenado de oficio por la Juez de instancia que conoció del proceso, solicitando dictaminar el % de PCL, así como la FE. de la demandante. La entidad tuvo en cuenta los siguientes padecimientos: HTA; DM Tipo 2, clase I, Depresión moderada y fibromialgia. **Concluyó una PCL 52.57% de origen común, y como FE el 22 de junio de 2018**, fecha del último concepto de rehabilitación, en que se *“define un pronóstico desfavorable, previo intento de reingreso laboral con restricciones funcionales, por ello se define esta como la fecha de estructuración de esta pérdida de la capacidad laboral.”*

- Deficiencias: 28.17%
- Discapacidades: 6.9%
- Minusvalías: 17.5%

**Audiencia de contradicción de dictamen.**

La médica perito evaluadora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia encargada de dictaminar la PCL de la demandante, compareció a audiencia de contradicción de dictamen realizado por la Juez de instancia, en la que manifestó que calificó a la señora Beatriz Adiola Torres Sánchez el 25 de noviembre de 2016 y aplicó el Decreto 917 de 1999 dada la previa calificación por el fondo de pensiones y las Juntas de Calificación de Invalidez con dicho baremo para que hubiera igualdad en la valoración.

Se ratificó en el porcentaje de PCL, FE y origen otorgado a la demandante, indicando que es un paciente que padece de hipertensión que es una enfermedad crónica, no tiene cura y solo puede ser contralada y manejada por medicamento, al igual que la diabetes; su proceso depresivo es complejo, y aun cuando puede mejorar, las personas con esta condición difícilmente pueden curarse por tratarse de una enfermedad que está en la estructura mental de la persona, además, padece de fibromialgia, también conocida como reumatismo no articular, y se exacerba con su depresión. Explicó que por lo general **estas enfermedades evolucionan negativamente, por ello, al momento de la calificación, observó una situación más crítica en su estado de salud, respecto a los anteriores dictámenes**, lo que además hace **modificar la fecha de estructuración, como en este caso al fijarse el 22 de junio de 2018, cuando se emitió concepto desfavorable de rehabilitación, dado que la demandante intentó reintegrarse laboralmente con restricciones funcionales, pero no lo pudo hacer.**

De los cinco dictámenes allegados al plenario se puede apreciar la relación de diagnósticos padecidos por la hoy demandante. Igualmente se exponen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos y padecimientos, la historia clínica aportada para estudio, siendo expedidos por entidades competentes y se argumentan las razones por las cuales se define tanto el origen como la fecha de estructuración y el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, y cumplen con los parámetros definidos por el Manual de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral.

---

<sup>27</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 324/330

Así las cosas, los dictámenes cuya declaratoria de ineficacia se pretende, se consideran válidos, no siendo procedente la declaración deprecada en la demanda, contrario a lo concluido por la A Quo, aspecto en que se **revocará** la sentencia de instancia.

Pese a lo anterior, considera esta Sala de Decisión que el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, no sólo **es más completo en cuanto al análisis de las patologías padecidas por la demandante, si no que tiene en cuenta el diagnóstico de *Diabetes Mellitus*, omitido por los elaborados por las JRCIA y JNCI, no atendidas en su momento por la pasiva, reflejando con mayor claridad y completitud la realidad clínica de la demandante, más aun cuando padece de enfermedades crónicas como hipertensión arterial y *Diabetes Mellitus*, que no tienen un pronóstico de recuperación**; explica además la razón por la cual adoptó la referida fecha de estructuración en virtud de la emisión del último concepto desfavorable de rehabilitación, tras haberse intentado infructuosamente, su reingreso laboral con restricciones funcionales; de ahí que la Sala, adopte el dictamen allegado por la activa a efectos de decidir los problemas jurídicos planteados.

No se acogerá lo apelado por Protección S.A. en cuanto adujo que las pretensiones de la demanda se enfocaron únicamente a revisar el criterio de discapacidad de la demandante, el cual no fue superado por la prueba pericial ordenada de oficio por la Juez A Quo, lo cual diverge con el escrito de demanda, porque en ella se solicitó declarar la nulidad de los dictámenes emitidos por la AFP y Juntas calificadoras, para así tener como válido el dictamen realizado por el CEMVAS en que otorgó una PCL superior al 50%; en ese sentido, el litigio se fijó con miras a determinar si la demandante presenta una PCL superior al 50% para ser acreedora de la pensión de invalidez, razón por la que, oficiosamente se ordenó un nuevo dictamen de PCL, en que se solicitó determinar la PCL y la fecha de estructuración de la señora Torres Sánchez, de ahí que no resulta acertado lo expuesto por Protección S.A., pues para determinar la PCL ha de acudirse a los 3 criterios de que trata el artículo 7° del Decreto 917 de 1999, a saber: **a) Deficiencia, b) discapacidad, y c) Minusvalía**, cuya sumatoria, arroja el porcentaje final de PCL, sin que se observe que los porcentajes aplicados por la médico perito de la FNSP de la U de A, extralimitara los topes previstos en el artículo 8° ibídem, para cada uno de los criterios, no siendo un criterio objetivo para desestimar el dictamen acogido por la judicatura, que el porcentaje de discapacidad de la JRCI haya sido superior al de la FNSP, pues ambos resultados se encuentran debidamente sustentados, y amparados en criterios clínico científicos.

Por lo anterior la sentencia se instancia **será confirmada** en este aspecto.

#### **b) Procedencia del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a cargo de Colpensiones y sus condiciones de causación y disfrute**

Por regla general, el reconocimiento de la pensión de invalidez se regula por la norma vigente en la fecha de estructuración de la PCL, y en el caso de la demandante, es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que exige el haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente

anteriores a la fecha de estructuración, aunadas a la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% prevista en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

Según historia laboral actualizada al octubre de 2017, la señora Beatriz Adiola Torres Sánchez cotizó 1.403 semanas entre el 15 de junio de 1989 y el 30 de octubre de 2017<sup>28</sup>, de las cuales 121.28 lo fueron entre el 22 de junio de 2015 y el 21 de junio de 2018, antes de la Fecha de Estructuración de la pérdida de capacidad laboral, suficientes para causar la prestación deprecada en la demanda.

Ahora bien, en cuanto al disfrute de la prestación, se tiene que, el inciso primero del artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es del siguiente tenor:

*“La pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”.* (subraya de la Sala)

De otra parte, el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 establece que la pensión de invalidez *“se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*<sup>29</sup>.

El mandato primigenio es retomado por el artículo 3 del Decreto 917 de 1999.<sup>30</sup>

Según lo anterior, las normas legales en materia de pensión de invalidez, disponen su causación desde la fecha en que se estructure dicho estado, misma que corresponde a su disfrute, salvo cuando se demuestre el pago de subsidios de incapacidad posteriores, tendientes a cubrir la contingencia o estado de necesidad que se genera a un trabajador por la suspensión transitoria de la capacidad de trabajo, originada por enfermedad o accidente, que reemplaza a la remuneración o renta que venía percibiendo.

En el caso, no se acreditó que la demandante estuviera percibiendo subsidios por incapacidad para el momento en que se estructuró la invalidez, por tanto, Protección S.A., está obligada a pagar la prestación desde el 23 de junio de 2018, día siguiente a la fecha de estructuración de la PCL, lo que da lugar a **modificar** la decisión en cuanto al disfrute de la prestación.

La mesada pensional como concluyó la A Quo, equivale a la mínima mensual reconocida para cada año, en consonancia con el salario mínimo con base en cual cotizó siempre.

<sup>28</sup> 01PrimerInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, págs. 246/255

<sup>29</sup> La Corte Constitucional, mediante sentencia C-252 de del 16 de marzo de 2004, declaró exequible dicha norma.

<sup>30</sup> *“Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.* (subraya de la Sala)

Se pagarán 13 mesadas anuales, al haberse causado el derecho con posterioridad al 31 de julio de 2011<sup>31</sup>.

Se actualiza el valor que Protección S.A. adeuda a la demandante, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 23 de junio de 2018 y el 31 de marzo de 2023, en la suma de Cincuenta y Seis Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Diez Pesos (\$56'144.810), así discriminada:

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	N° mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2018	7 y 9 días	\$ 781.242	\$ 5.677.025
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023	3	\$ 1.160.000	\$ 3.480.000
TOTAL			\$ 56.144.810

La mesada continuará pagándose para el año 2023 en \$1.160.000, sin perjuicio de los aumentos anuales previstos en el artículo 14 de la ley 100 de 1993.

Protección S.A. descontará del retroactivo pensional causado y el que se cause en adelante, lo correspondiente a las cotizaciones ante el Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo prevé el artículo 143 de la ley 100 de 1993 y el precedente judicial en la materia, tal y como lo dispuso la Juez A Quo.

**d) Intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 dispone que *“a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”*.

El artículo 19 del Decreto 656 de 1994<sup>32</sup> autorizó al Gobierno para establecer los plazos de reconocimiento de las Pensiones, sin que, en ningún caso exceda de cuatro meses<sup>33</sup>.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-975 de 2003 sentó que debe aplicarse la regla mencionada y como no se dispuso legalmente un plazo diferente para satisfacer esta prestación, por analogía (art 145 del CPTSS), debe entenderse que, en materia de pensión de invalidez, el plazo para su reconocimiento es de cuatro meses contados desde que se eleve la reclamación administrativa, tal y como lo interpreta la

<sup>31</sup> Acto Legislativo 01 de 2005

<sup>32</sup> Decreto declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-376-95 del 24 de agosto de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Jorge Arango Mejía.

<sup>33</sup> En este sentido se legisló para la pensión de vejez en el Artículo 9 Parágrafo 1o. Inciso Final de la Ley 797 de 2003.

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, acogida por esta corporación de segunda instancia<sup>34</sup>.

En torno a dicho aspecto se resalta que, la negativa de Protección S.A. frente a la solicitud de reconocimiento de la prestación no fue arbitraria, dada la pluralidad de dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos, y por enfocarse el debate procesal en la nulidad del dictamen emitido por Protección S.A. y las JRCIA y JNCI, respecto del porcentaje de PCL y fecha de estructuración de la PCL, tópico sobre el cual, carecía de competencia, no pudiendo accederse a la pretensión de intereses de mora.

Por ello, no se acogerá lo apelado por el demandante en este sentido, ni se acogerá la alzada de Protección S.A. en cuanto que sea absuelta de la indexación de la condena, pues para garantizar que la demandante perciba lo adeudado en su real valor, por ende, debe disponerse la indexación; para ello, la demandada tomará la fórmula que ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que haya de efectuarse el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, por tratarse de prestación periódica.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada reajuste a indexar.

### III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por las demandadas han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, que no operó, al no haber transcurrido entre la causación de la prestación, - 8 de octubre de 2015 fecha de emisión del dictamen de PCL por parte de la JNCI-; la respuesta a su reclamación, -7 de enero de 2016<sup>35</sup>-, y la radicación de la demanda, -26 de noviembre de 2016<sup>36</sup>-, el periodo de tres años a que refieren los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

### IV. COSTAS

Sin costas en esta instancia dada la no prosperidad de ambos recursos de alzada.

### V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

---

<sup>34</sup> Ver entre otras, la sentencias SL14269 de 2014, SL 2150 de 2017 y SL 1562 de 2019

<sup>35</sup> 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, pág. 33

<sup>36</sup> 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820161399.pdf, pág. 8

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE

**PRIMERO. Revocar parcialmente el numeral primero** de la sentencia proferida el 2 de abril de 2019 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario de doble instancia promovido por Beatriz Adiel Torrez Sánchez contra Protección S.A., Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en cuanto declaró la nulidad de los dictámenes emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta nacional de Calificación de Invalidez, por lo ya motivado.

**SEGUNDO: Modificar parcialmente el numeral segundo de la referida sentencia**, el sentido de indicar que la causación de la prestación de invalidez lo es a partir del 23 de junio de 2018, tal y como se explicó en la parte motiva de la providencia.

**TERCERO:** Actualizar el valor de la condena, precisando que Protección S.A. pagará a la demandante, por concepto de retroactivo pensional causado desde el 23 de junio de 2018 al 31 de marzo de 2023, la suma de Cincuenta y Seis Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Diez Pesos (\$56'144.810). La mesada pensional para el año 2023 se continuará pagando en \$1.160.000, sin perjuicio de los aumentos anuales previstos en el art.14 de la ley 100 de 1993.

**CUARTO: Confirmar** en lo demás la referida sentencia.

**QUINTO:** Sin costas en esta instancia.

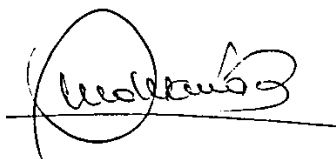
Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN